

!#i*%?+!#i\$*%?)
(¿%*\$i#i#i\$*%?)

LATFEM

¿Dónde están las feministas?

?

Organizando Las resistencias fundamentales

x

x

Red de
Periodistas
Feministas
de Latinoamérica
y el Caribe

!!

¿Qué tienen en común la lucha de mujeres trans y migrantes en Colombia con el activismo LGTBQ+ cristiano de Cuba? ¿Qué une el exilio de feministas nicaragüenses con la organización antirracista de mujeres brasileñas y el activismo por el derecho al aborto en El Salvador? En principio, podemos decir que como mínimo se trata de colectivos marcados por la insistencia aún en contextos hostiles. Este *dossier* surgió primero con un título que también es una idea: *las resistencias fundamentales*. En LatFem tenemos una obsesión con la construcción de un archivo para la memoria feminista y es por eso que apostamos a contar historias de organización y resistencia, que ponen en evidencia las consecuencias materiales del neoliberalismo y los fundamentalismos en las vidas de las personas y los pueblos. Es la respuesta colectiva a una pregunta que nos persigue: “¿Dónde están las feministas?”. Y se contesta en cada una de las cinco historias que aquí presentamos.

Agustina Frontera
María Florencia Alcaraz
Vanina Escales

Co-directoras de LatFem

A lo largo de cinco artículos producidos por integrantes de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, podremos visibilizar sujetos, territorios y tramas que se ven atravesados por obstáculos concretos que amenazan el acceso a derechos en Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Cuba, Brasil y El Salvador. Esos derechos son, aunque no exclusivamente, los sexuales y reproductivos; los que permiten la vivencia plena de las identidades trans, travestis y no binarias; el derecho a una vida sin discriminación racial. La trama, la red, tiene hilos tejidos entre espacios vacíos, es en esos lugares donde las prácticas de grupos fundamentalistas repercuten más fuerte: en quienes tradicionalmente son más vulnerados.

En Latinoamérica y el Caribe las transformaciones de la lucha feminista de los últimos años pueden traducirse tanto en la expansión de un movimiento que crece cada vez con más fuerza y color por las calles de la región, como en reformas legislativas que redundan en la ampliación de derechos. Sin embargo, las transformaciones más profundas por las que bregamos se ven amenazadas a diario por dos principales motivos. De un lado nos encontramos en un escenario atravesado por el neoliberalismo, que promueve la reafirmación de las libertades individuales, sin considerar el bienestar colectivo. De esta manera, contribuye al engrosamiento de las desigualdades interseccionales que aumentan a mayor velocidad en el contexto de pandemia. Por el otro, los grupos antidemocráticos aprovechan estos escenarios tensionados para avanzar en la diseminación de discursos de odio que alcanzan a distintos grupos, en especial las juventudes, y que encuentran en los sectores más conservadores y antiprogresistas aliados para obstaculizar la expansión y consolidación de una transformación efectiva.

Los discursos y las acciones de estos grupos opositores a la ampliación de derechos conforman una verdadera avanzada desdemocratizadora que logra colarse en los gobiernos, parlamentos, organismos internacionales, medios de comunicación, iglesias y redes sociales. Incluso nos sorprenden intentando capturar al mismo movimiento feminista. Si bien en cada país la situación es particular y en algunos casos se verifican dentro de los estados intentos de contener ese avance desdemocratizador, es posible hacer una lectura unificada de la región.

Desde el periodismo feminista surgen respuestas concretas a la manera de contrarrestar esta avanzada. En estas notas mostramos resistencias diversas y tenaces: las formas que toma la lucha por los derechos, a partir de la visibilización de la constelación de alianzas feministas multisectoriales. Desde LatFem no queremos construir relatos únicamente cuando la noticia es tragedia. Queremos contar todo lo que hacen las activistas por estas vivas, comunicar desde la posibilidad de transformación y enfocarnos en las soluciones concretas. Ahora que sí nos ven es momento de mostrar y narrar la fuerza de nuestro movimiento en el presente apostando a transformar el futuro.

Las voces que el régimen de Daniel Ortega no puede callar: las nicaragüenses resisten desde el exilio

Crónica: Katherine Estrada Téllez con colaboración de Ximena Castilblanco / Fotos: Ximena Castilblanco

Protestar es un derecho, pero en Nicaragua ese ejercicio político tiene como consecuencia la persecución y terminar frente a dos opciones: la represión o el exilio. Costa Rica recibió en los últimos tres años a más de cien mil nicaragüenses, con un puñado de pertenencias y la vida desarmada con premura. Desde allí las exiliadas denuncian la violencia estatal y política en su país de origen, los retrocesos en derechos para las mayorías, las alianzas con los fundamentalismos y la degradación de los acuerdos básicos para una democracia. Este texto forma parte de *Las resistencias fundamentales* un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista.



Mientras se resguardaba en una casa de seguridad, luego de la “Operación Limpieza” que el gobierno de Daniel Ortega ordenó el 8 de julio de 2018 en Carazo, Xaviera decidió que debía moverse del lugar para proteger su vida. “No me dio tiempo de procesar nada, no pude despedirme de mi hija, ni llorar –cuenta. Cuando me vi, ya iba por el monte buscando llegar a Costa Rica”. Su vida no entraba en la mochila con la que emprendió el viaje diez días después.

Ese año fue el más significativo para la historia del tercer milenio nicaragüense. Catorce años de descontento por goteo hicieron una represa colapsada. El 18 de abril de 2018 estalló una crisis política y social en la que miles y miles tomaron las calles por reformas en la seguridad social pactadas entre el gobierno de Daniel Ortega y el FMI. Ese *despertar de abril*, intensificado durante meses por protestas sostenidas y el reclamo de la renuncia al presidente, se agravó por el accionar de la policía y otras fuerzas de choque. El saldo puede cuantificarse: Ortega dejó al menos 113 ejecuciones extrajudiciales de las 328 cometidas en su mayoría entre abril y septiembre 2018, un número incierto de personas **desaparecidas** o sometidas a desaparición temporaria, miles de heridas, más de 150 de presxs políticxs y decenas de miles de desplazados.

La euforia de esos comienzos, el ejercicio político de la protesta para hacerse escuchar, se fue transformando en una preocupación constante. Desde ese momento hasta este presente, el hoy ya señalado como “Régimen de Ortega-Murillo” despojó a referentes sociales y políticos de su nacionalidad, privó de personería jurídica a partidos y organizaciones de la sociedad civil y silenció medios de comunicación.

Costa Rica se ha convertido en el segundo país de destino para las y los nicaragüenses, población que ha venido en aumento en los últimos tres años. La Dirección de Migración y Extranjería indica que desde 2018 hasta octubre de este año recibieron 103,350 solicitudes de refugio de nicaragüenses. El 41% son mujeres.

Al igual que Xaviera, Iris y Nuriz cruzaron hacia el sur del Río San Juan a fines de 2018, arrinconadas por la persecución policial ante dos opciones: la represión o el exilio. Entraron a Costa Rica de forma irregular, por veredas surcadas por caminantes, con poco dinero y con el temor de ser interceptadas por militares de la zona. No viajaban más que con una mochila cada una, dentro de ella solo cargaban lo necesario para sobrevivir tres meses, pues en ese momento no tenían noción de cuánto les iba a durar el exilio.



Xaviera entró a las veredas de la porosa frontera en compañía de jóvenes caraceños que huían de la represión, pero Iris cruzó sola. De inmediato llegaron al lado costarricense, se dirigieron a pedir refugio a las oficinas de migración de Peñas Blancas. Nuriz salió a media noche y con su hija en brazos se embarcó en el Río San Juan y llegó a suelo tico al amanecer. Su hermana la esperaba en la zona de Los Chiles en Costa Rica.

“Salí huyendo para preservar mi vida”. “Allá no podés protestar, no podés marchar porque te meten preso”. “Yo nunca me imaginé salir del país por proteger mi tierra, defender mis derechos”. Las tres nicas exiliadas podrían afirmar exactamente lo mismo, pero la autora de la primera oración es Xaviera, la segunda es Iris y la tercera es Nuriz.

Para estas mujeres, el proceso migratorio ha significado comenzar de cero. Algunas se alojaron al llegar con familiares, otras con amistades o en lugares de acogida donde les brindaron posada por un tiempo. Elecciones que respondieron al temor de gastar el poco dinero que tenían en un país mucho más caro que Nicaragua y sin fuentes de ingresos.

La resistencia nica desde el exilio preservó sus vidas y las enfrentó a nuevos escenarios en los que deben lidiar con trabas migratorias a la hora de su regularización en el país. La xenofobia pone en desventaja a las mujeres migrantes. Es común escuchar que algunas sufren humillaciones o abusos en sus lugares de trabajo, que otras fueron engañadas respecto de las condiciones laborales que les prometieron y quedan expuestas a escenarios de trata de persona, mientras que otras no encuentran más opciones de trabajo que ofrecer servicios sexuales. Un sinnúmero de limitaciones les dificulta su inserción al país.

En estos tres años fuera de Nicaragua construyeron redes y fuerza colectiva, se identificaron feministas. En ese mismo tiempo vieron cómo las feministas y sus organizaciones dentro de Nicaragua fueron asediadas, objeto de arbitrariedades, agresiones y estigmatización. En ese contexto, resistir se convirtió en una práctica cotidiana, un compromiso, una misión y se abrió paso entre el estudio, el trabajo y los cuidados. Xaviera, Iris y Nuriz no sabían, no podían saber en abril de 2018, que ese ejercicio de resistencia las iba a transformar en activas, empoderadas y resilientes.



Xaviera Molina, exiliada política en Costa Rica.



A sus 37 años, Nuriz trabaja en el campamento campesino en Upala, al norte del país, lugar que creó al año de haber llegado a Costa Rica, después de pasar mucho tiempo sin encontrar trabajo en la capital y sufrir xenofobia por parte de lxs costarricenses en San José. Es esa situación la que la motiva a unirse con tres campesinos y alquilar tierras para trabajar y vivir de ellas, como lo hacía en Nicaragua.

Ahora el campamento campesino es un espacio autosustentable que alberga más de cincuenta núcleos familiares. Allí se capacitan para mejorar los procesos de producción y cultivos, y también disponen espacios de reflexión y contención emocional. Nuriz y Francisca Ramírez, otra lideresa campesina, han realizado alianzas con organizaciones que apoyan y acompañan a migrantes, como Cenderos, RET Internacional y otros organismos, para obtener capacitaciones y talleres sobre violencia de género, salud sexual y reproductiva, autonomía económica y salud mental.

Dentro del campamento, crearon el grupo de campesinas Las Mujeres de Upala, para promover los productos que cultivan y producen. El espacio es clave para la sustentabilidad económica de cada una de las mujeres. En paralelo, hace ocho meses que trabaja con Cenderos en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia y para personas refugiadas. Nuriz no para. Quiere que las mujeres recuperen la confianza y la esperanza, la autonomía y las ganas de proyectarse, así como ella lo ha hecho.

La realidad de Xaviera, a sus 27 años, es bien distinta. Dedicó parte de su vida en el exilio a recuperar a su hija. Eso la hizo conocer de cerca la burocracia y la violencia estatal. Cuando debió exiliarse, dejó a su hija al cuidado de sus abuelos. Hasta ese momento era la principal cuidadora. Pero a los nueve meses de estar lejos enfrentó un juicio a la distancia, sin garantías del debido proceso, en el que perdió la custodia de su hija mayor. Recién en marzo de 2020 logró reunirse en Costa Rica con su hija, quien vive ya con su madre en calidad de refugiada. A pesar de tener protección internacional, hoy enfrenta un nuevo juicio de Restitución Internacional de Menores.

Este proceso pudo sobrellevarlo gracias a las redes de amigas, que se convirtieron en hermanas en el exilio. Se acuerpan y abrazan con sus conocimientos y herramientas. Esa red las llevó a buscar apoyo entre otras colectivas de mujeres, que la conectaron con especialistas en derecho. Cada punto de la red sostiene al resto; una trama que encuentra en la vulnerabilidad y la codependencia su fortaleza. Fue en este espacio donde conoció a Iris.



Nuriz Sequeira, lideresa campesina nicaragüense exiliada.



Iris, tiene 28 años y en Nicaragua formaba parte del grupo feminista Las Venancias. Al llegar a Costa Rica, se encontró con la colectiva Las Rojas y continuó allí su activismo. Su recorrido ha sido el de muchas feministas –tanto de largo aliento como recién venidas al movimiento– exiliadas. Los colectivos costarricenses se prepararon para recibir e integrar a las refugiadas, también para acompañar el proceso personal y político que significa el exilio.

Junto con Xaviera, Iris y otras nicaragüenses formaron la Red de Mujeres Pinoleras, espacio de resistencia y resiliencia. A lo que inicialmente era un espacio para encontrarse y escucharse, hablar de política y preocupaciones en común, se fue convirtiendo también en un “trueque feminista”, para mejorar su estabilidad económica. El intercambio es de ropas, accesorios y utensilios, pero también de ideas y saberes.

Con un impulso más, crearon la Feria Pinolera, que agrupa e impulsa a más de 40 iniciativas de mujeres nicaragüenses exiliadas. Cada mes, el evento hace confluir emprendimientos distribuidos por el mapa costarricense en la capital de Costa Rica. Nuris es una de las que viaja junto con Las mujeres de Upala, desde el norte del país, casi en la frontera nica, hasta San José, para ofrecer sus productos y reconectar con las demás exiliadas nicaragüenses.

Estar organizadas ha sido clave para estas tres mujeres. Tanto la Red de Mujeres Pinoleras como Las mujeres de Upala han sido referentes para la población migrante y exiliada, para organismos costarricenses e internacionales. Poco a poco han ganado espacios de participación.

A fines de 2020, distintos colectivos convergieron en la Coordinadora Feminista contra el Femicidio e Impunidad, en Costa Rica, de la que ahora Iris es parte. Estos espacios favorecieron que las mujeres recuperen la seguridad que habían perdido en Nicaragua. Ahora salen a las calles de Costa Rica, tienen confianza en la justicia y perdieron el miedo a denunciar.



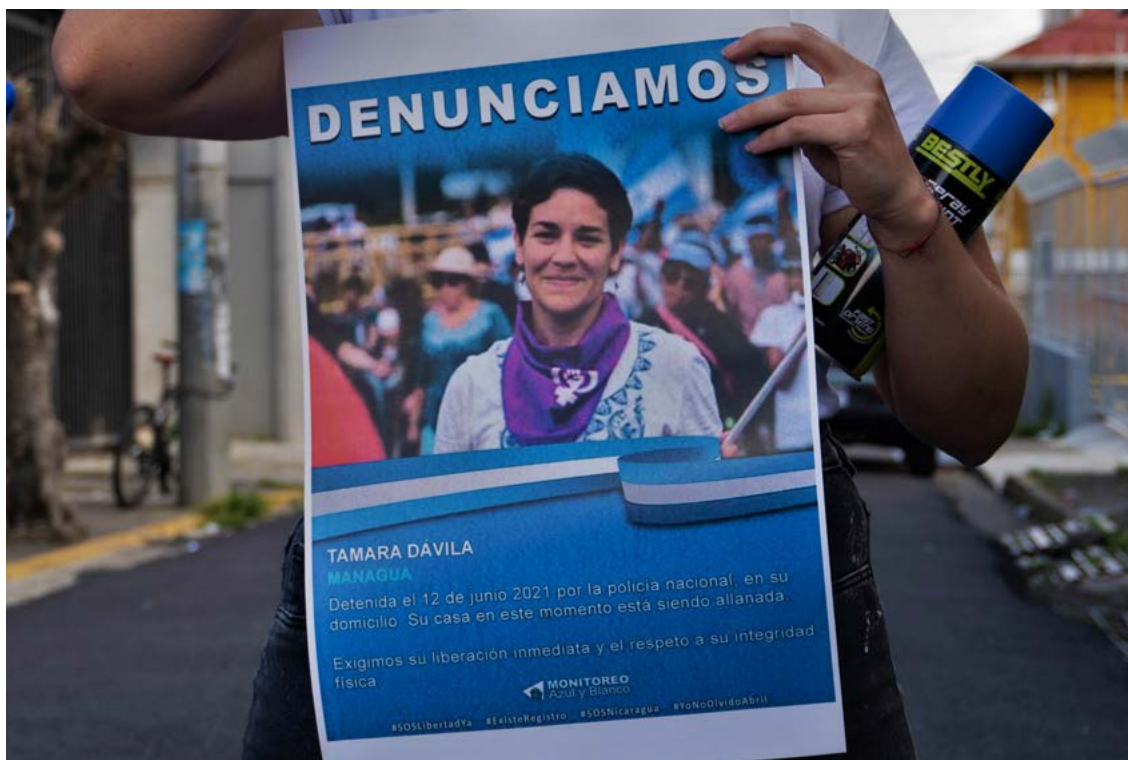
Iris Barrera , activista feminista exiliada.



Este 25 de noviembre, por tercer año consecutivo, estas nicaragüenses se sumaron a la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer con un reclamo propio: la liberación y el cese del aislamiento de las presas políticas en Nicaragua. También pidieron por el esclarecimiento de los 66 femicidios en lo que va del año en ese país, y denunciaron la impunidad y el estado de terror impuesto por el régimen de Ortega-Murillo.

Lo que en 2018 fue para [Nicaragua](#) la represión por parte de las fuerzas de seguridad, en los años sucesivos se convirtió en la consolidación de un Estado policial, con su aparato de vigilancia política y la asfixia de derechos ciudadanos. Entre 2020 y 2021 el gobierno de Ortega tomó medidas que, según la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos](#), “impiden a las personas organizarse, asociarse, participar políticamente y expresar libremente sus opiniones”. Se trata de un régimen también misógino, cómplice de la violencia machista y aliado de fundamentalismos religiosos, que ejercen violencia simbólica en las mujeres cis y trans, que [limitan la autonomía sobre sus cuerpos](#) y las obligan a mediar con sus agresores. El objetivo de este escenario es disciplinador, acalla la disidencia y socava los pilares de pluralismo necesarios para la democracia: las manifestaciones están prohibidas, se realizan allanamientos a organizaciones de derechos humanos, se encarcelan periodistas y opositorxs, cierran medios de comunicación. Las liberaciones y detenciones carcelarias también están sometidas a la arbitrariedad del gobierno y son utilizadas con fines políticos.

Frente a las violencias en Nicaragua, las voces de estas mujeres resuenan con más fuerza desde el exilio costarricense. Muestran que la solidaridad es transnacional, como la lucha contra la misoginia, la xenofobia y la transfobia; que ante cada régimen autoritario hay alianzas para resistirlo. ¡Libertad a las presas políticas!



Plantón por la Liberación de las Presas Políticas en Nicaragua, frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

Cuando “las T” descubren que son personas con derechos en Arauca, Colombia

Crónica: Karen Parrado Beltrán / Fotos: Will Sánchez

No se trata de pedir tolerancia, sino de que se respeten sus derechos. Una de las grandes resistencias de las mujeres trans en Arauca ha sido poner frente a los ojos de otros su dignidad. Otra gran resistencia: que tener cuerpos e identidades no hegemónicas no implique vivir en los márgenes. Pero la hermandad de los soles tiene opositores. Al machismo histórico se sumó un discurso fundamentalista que comenzó a impregnar las conversaciones políticas y que se opone no sólo a los derechos sociales e igualitarios, sino también al acuerdo de paz en Colombia. La respuesta de “las T” es organizar la dignidad. Este texto forma parte de *Las resistencias fundamentales* un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista.



La frontera de Colombia y Venezuela mide 2.219 kilómetros. En medio de esa extensa línea limítrofe está Arauca, una ciudad colombiana de 75 mil habitantes donde viven 87 mujeres trans alrededor de un río poderoso. 77 venezolanas y 9 colombianas, estima Tamara Montenegro, la líderesa trans que trabaja por los derechos de “las T” en una de las zonas de Colombia más comprometidas con la crisis migratoria venezolana de los últimos años.

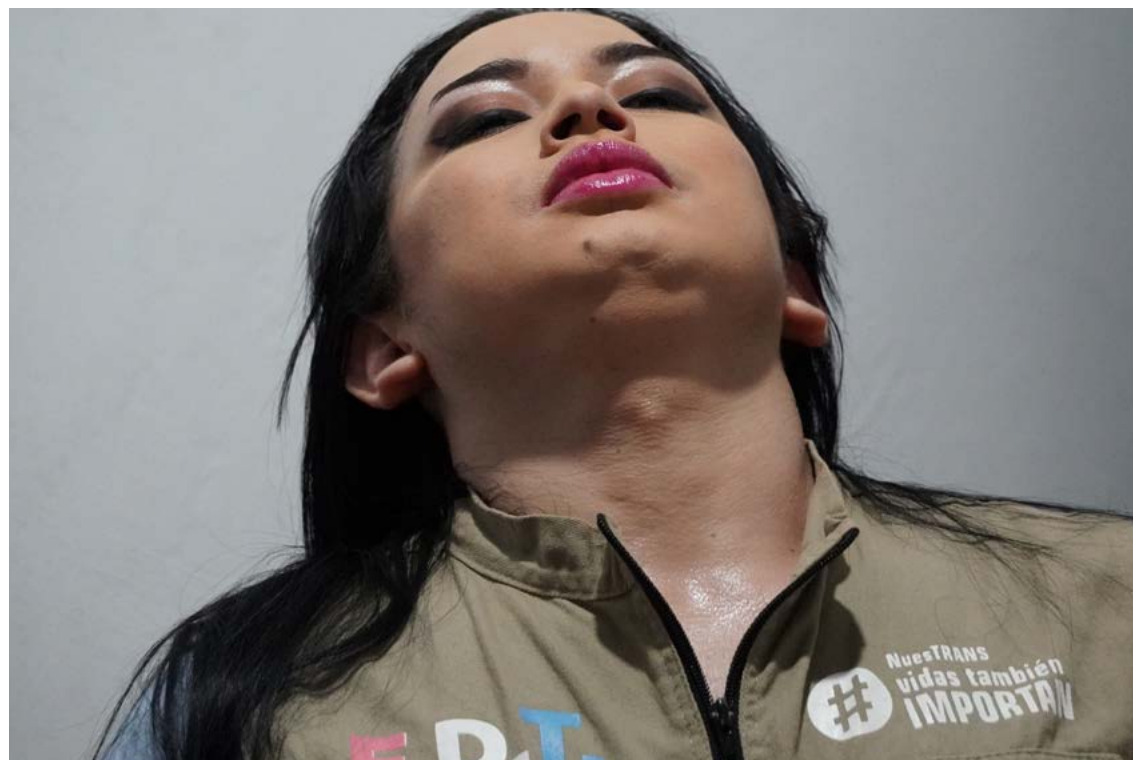
Tamara tiene 22 años y dirige la Fundación Dignidad Trans, uno de los pocos grupos civiles que defiende los derechos de las personas con experiencias de vida trans, migrantes y retornadas en Arauca. Esa ciudad, donde ahora está Tamara sentada frente a un computador, amanece y cierra sus ojos junto al río. Está lejos de Bogotá, la capital del país, y alberga en su territorio a casi 45.000 de los 1.7 millones de venezolanxs que viven en Colombia, según un informe que el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos publicó a principios de 2021. Más de la mitad de los y las habitantes de Arauca son migrantes provenientes del país vecino.

“La verdad es que me encanta pelear por los derechos de las demás personas”, dice Tamara y rasga la pantalla con una sonrisa. “Esos derechos o se tienen que dar o se dan, porque es nefasto. Porque acá en Arauca nos sentimos soles. Entre mujeres trans, hombres trans y mujeres cisgénero sentimos soledad”.

La misma soledad que sintió Tamara cuando decidió irse de la ciudad en la que nació a los 10 años. No aguantó seguir reprimiendo su identidad femenina. En la misma Arauca que un día la expulsó, hoy trabaja para que las personas trans puedan ejercer sus derechos como cualquiera. Que caminar libremente por la calle, trabajar o ser llamadas por sus nombres de mujer no sea un privilegio.

Los dolores de Tamara

Tamara escuchó a la muerte de frente. Todavía recuerda el sonido de los disparos que le atravesaron la carne en dos momentos diferentes de la vida, durante los largos días que vivió fuera de Arauca, huyendo.



Zeidy Tamara Montenegro, la líderesa trans de 22 años.



“Me sentí más muerta que viva ese día”, cuenta sobre el primer disparo. Le dio de lleno en la pantorrilla derecha, corrió como pudo para esconderse de los tipos que la habían agredido física y sexualmente hasta dejarla herida en medio de un potrero. Pasó en Cúcuta –la capital del departamento de Norte de Santander, a más de 400 kilómetros de Arauca–, mientras se prostituía para sobrevivir como una recién llegada. Tenía 10 años.

“Todavía no se me borra de la cabeza”, dice sobre el segundo, que más que un disparo fue una ráfaga. Lo recibió en el brazo, aunque a las que mató fue a dos de “las pollitas”, como llamaban al grupo de mujeres trans adolescentes con el que Tamara se la pasaba de arriba para abajo en Cúcuta. “Si usted las hubiera visto, eran dos gotas de agua”, dice nostálgica. No es exagerado decir que ese día quedó doblemente huérfana. Tenía 13 años y entonces huyó de nuevo.

Dolor en las cifras

Desde que Colombia firmó el Acuerdo Final de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016, la agenda de la población trans vivió una especie de estallido, ganó mayor visibilidad. Especialmente con el punto 5 del Acuerdo, que habla de las víctimas del conflicto armado.

Allí quedó claro que las personas con expresiones de género diversas también vivieron persecución, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos (conocidos en buena parte del país como “limpieza social”) por parte de paramilitares, guerrilla y el Ejército colombiano, durante los casi 60 años que duró este período del conflicto colombiano.

Tamara –que no es una guerrera pero sí se ha enfrentado a la guerra en carne viva– dice que ahora todo está un poco más calmado, pero que la amenaza para las personas trans en Arauca no se ha terminado. “El conflicto armado siempre ha estado presente en el territorio araucano”, advierte.

En Colombia, como en buena parte de la región latinoamericana, los derechos de las personas trans no son una obviedad. Tampoco es obvio que luchar por ellos cueste vidas, pero así es. El 70% de los asesinatos de personas trans ocurren en América Central o del Sur, según reporta el [Observatorio de Personas Trans Asesinadas](#). De acuerdo a la más reciente [actualización](#) del Observatorio, el 2021 “mostró ser el año con mayor número de muertes de personas trans y género-diversas” desde que se inició el registro (en 2018). El 96% de las personas trans asesinadas en 2021 eran “mujeres trans o personas trans femeninas”.

En Colombia, la Red Comunitaria Trans, que lleva registros propios y triangula información con otras organizaciones civiles, [denunció](#) que 32 mujeres trans han sido asesinadas en lo que va de 2021, aunque el subregistro es altísimo en estos casos. De acuerdo a los [datos disponibles sobre violencia por prejuicio](#) (que incluyen homicidios o cualquier acto de discriminación), 247 de 516 casos de este tipo en Colombia están relacionados con la identidad y expresión de género, el 92% (225 de 247) son mujeres trans.

Y en Arauca el panorama no es mejor. El departamento (que también se llama Arauca) tiene el mayor número de casos de violencia por prejuicio: 68 de 516. Seguido por Norte de Santander (48), la zona a donde Tamara huyó, ya hace 12 años.

La hermana Zafiro

A Zafiro Robles la hermandad la sacó a la luz. “Estaba como en un anonimato por allá, en un escondite. No quería salir de ahí”, dice, tragándose el llanto. “Entonces salí a la luz, por medio de la fundación”. Conoció la Fundación Dignidad Trans en 2019, cuando era apenas un colectivo liderado por dos mujeres trans locales: Tamara y María Victoria Leguizamo. Ellas estaban decididas a cambiar las injusticias y situaciones de exclusión que vivían a diario las mujeres trans por el hecho de expresar una identidad de género diferente a la acostumbrada por la gente del pueblo.

Resistentes y adoloridas, las hermanas de Dignidad Trans nacieron entre aquellas que habitaban los márgenes de una ciudad machista en los llanos orientales de Colombia, como soles en la oscuridad.





Zafiro Robles, integrante de Dignidad Trans.

“Comenzamos a hacer incidencia en Arauca –dice Tamara– y demostramos que las personas trans tienen muchas capacidades”. Uno de los primeros objetivos de la fundación fue dignificar la vida de las personas trans y migrantes. “Que sepan que las personas trans, aparte de ser putas o peluqueras, tienen unas capacidades diferentes o iguales a las de los demás”, apunta.

Zafiro llegó a la fundación porque una amiga la invitó a una reunión. “Lo más impactante fue ver que éramos una comunidad. Me di cuenta de que hacía parte de algo”. Desde ese día, no ha dejado de ser una de las “alumnas destacadas” de los talleres que organiza la fundación, a la cual atribuye el hecho más luminoso de su historia reciente: descubrir que tenía derechos.

—Me di cuenta de que yo cumplía deberes como ciudadana colombiana. Pago impuestos, cumplo las leyes, entonces, ¡cómo no voy a exigir mis derechos!

Zafiro quiere aprender más para trabajar por el resto de las hermanas. Eso ha hecho desde que llegó. Primero, asistió a la Escuela de Liderazgo Trans organizada por la fundación en 2020. “Ahí obtuvimos el nombre de mujer en la cédula y ya me pude quitar el nombre de hombre”. Luego, reconoció que su identidad era diversa. “Descubrí que mi género era mujer trans, porque a mí me gusta vestirme de mujer y las cosas de mujer”. Después, hizo un curso sobre economía básica. “Que eso fue lo que me empoderó a mí en mi peluquería”, dice emocionada, mientras lee la leyenda del diploma. “Hace constar que Zafiro Robles participó en...”.

Las resistentes

Tamara ya dejó los años más duros del trabajo sexual. “Es que en aquella época las mujeres trans éramos como un bicho raro en la sociedad. Bueno, para los policías y entes armados, porque para los clientes era una maravilla, de verdad”, dice con la voz tamizada en un tono ronco.

Cuando volvió de Cúcuta se matriculó en un colegio de Arauca para terminar la secundaria, buscó trabajo, un hogar y nuevas amigas. Fue difícil, como lo fue todo desde que hizo pública su identidad trans. “Mí



hermano mayor, que vive frente a la casa de mi mamá, me quiso volver a golpear y me insistió en que me vistiera de hombre y todo eso. Pero esta vez tuve más valor. Ya pasé mucho como para que una persona me venga a entablar lo que tengo que hacer”, destaca, sin sobreactuar la valentía que necesitó para resistir esos golpes.

Hasta entonces había vivido excluida, como gran parte de las mujeres trans de Colombia según advierte *5 derechos en clave trans. Análisis sobre la situación de los derechos a la movilidad, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda de las personas Trans en Colombia*, un libro editado por Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans) en 2021.

“Generalmente, este ciclo de exclusión comienza a edades tempranas, generada por el rechazo y la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes trans en nuestros hogares, comunidades y centros educativos”, explica.



Tamara y la hermandad en la marcha del 25 de noviembre de 2021 en Arauca.

Sin embargo, no es a lo único que enfrentan las personas trans. Que una mujer trans de América Latina llegué a su cumpleaños 36 es una hazaña. De acuerdo a un [informe](#) presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2015, la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 35 años o menos.

Tamara pronto celebrará su cumpleaños 23 años. Más que una estadística, para ella la muerte es una certeza. Casi muere asesinada a los diez años y vio como dos de sus hermanas de calle –adolescentes de 16– eran asesinadas cuando acababa de cumplir trece. Ha pendulado en ese mortal porcentaje como una trapecista.

Llegó a la séptima con tercera –la calle de Cúcuta que era la madriguera transgénero– una noche de 2009. Buscaba a “una amiga que se viste de mujer, pero es hombre”, recuerda que le dijo a una señora que se acercó a auxiliarla en la terminal de transportes de esa ciudad al verla llorando. Y se quedó ahí para sobrevivir la orfandad, el hambre, la violencia, la prostitución, la transfobia y un tránsito de género áspero, que le quebró la piel.



Una de sus grandes resistencias ha sido poner frente a los ojos de otros la dignidad de las mujeres trans. Hacerles ver que sus vidas importan. Sean de Arauca o hayan llegado allí atravesando las trochas fronterizas con Venezuela. Como sea. “Las T” se resisten a que tener cuerpos e identidades no hegemónicas implique, irremediablemente, vivir en los márgenes.

Ser trans, dice el libro de GAAT, “nos ubica en contextos de criminalidad (como las zonas de alto impacto o “zonas de tolerancia”), a los que paradójicamente la misma sociedad nos ha marginado, porque asegura que es ahí donde pertenecemos”.

Transgredir.

Transitar.

Transfronterizas.

Transparentes.

Una lista de palabras sobre “las T” puede ser precisa y dolorosa.

El discurso anti soles



COLOMBIA

Integrantes de Dignidad Trans en la marcha del 25 de noviembre de 2021 en Arauca.

La hermandad de los soles tiene opositores. Unos históricos, como el machismo que impregna a la sociedad llanera en Arauca y que permea a las instituciones locales. “Hay demasiados obstáculos para los procesos LGBT+, más que todo t, ya que nosotras las t hacemos más incidencia en el territorio”, explica Tamara.

Pero otros se han posicionado de a poco. Como el concepto de “ideología de género”, un discurso fundamentalista que comenzó a escalar conversaciones, noticias e intervenciones políticas en Colombia en 2016. Y que pronto se convirtió en la herramienta con la que los grupos políticos conservadores del país hicieron contrapeso al respaldo popular que el Acuerdo de Paz estaba ganando en el país, mientras era negociado entre el gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.



Esa estrategia fue fundamental para que en el plebiscito que buscaba refrendar ese acuerdo ganara el No, como quedó demostrado luego. De acuerdo a los datos oficiales, 6.431.376 de personas apoyaron el No, el 50,21% del total de los votos.

El discurso de la ideología de género se propagó rápidamente. Respetar la diferencia de género iba a convertir en gays, lesbianas y trans a todos, desde niños hasta viejos, esa era la tesis. Entonces, la bestia fundamentalista del miedo a lo diferente no tardó en aparecer, tan arraigada que está en el seno de una sociedad con fuertes raíces católicas.

“En un contexto en donde los fundamentalismos intentan atacar la democracia con lo que llaman la ideología de género, que no es más que una interpretación de los fundamentalismos que proliferan en la región. Es necesario seguir avanzando en los derechos sexuales y reproductivos. En un contexto tan adverso, esta agenda sigue siendo prioritaria”, advirtió al respecto la directora regional de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara, en 2019.

Ese año nació Dignidad Trans.

La Patrulla Trans

“Yo era representante de los estudiantes en el colegio”, cuenta orgullosa Tamara, que continúa el relato de su historia frente al computador. Su regreso definitivo a Arauca fue en 2015, después de haber transitado por Cúcuta, Bogotá y algunos otros pueblos pequeños del interior de Colombia. Sabe como nadie lo que es ser una retornada. “Entonces mi mamá se puso muy contenta porque de sus cinco hijos la primera que se graduó del colegio fui yo”.

Cristina Rodríguez Romero, una mujer trans que trabaja en el Fondo Lunaria y conoce la historia de Tamara y el trabajo de Dignidad Trans habla de la deshumanización que enfrenta todos los días la población trans en Colombia. “Estamos en una sociedad donde el punto de deshumanización de la experiencia de vida trans es tal que nos despojan de toda posibilidad de derechos en todas las instancias posibles”, dice.

Fondo Lunaria y Dignidad Trans se han convertido en aliadas para algunos de los proyectos que la Fundación desarrolla en Arauca. Uno de ellos es la casa refugio para mujeres trans, migrantes y retornadas. Dignidad Trans la abrió en los meses más fuertes de pandemia, en 2020, para asistir a las hermanas que se quedaban sin sustentos. El trabajo escaseaba. Muchas peluquerías cerraron y, como suele decir la gente en Colombia, “la calle se puso dura”.

“Gestión y remisión”, resume Tamara lo que hace Dignidad Trans en Arauca. Concentra sus esfuerzos en conseguir recursos con organizaciones no gubernamentales y programas internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), o el Fondo Lunaria. En la pandemia eso le permitió a Dignidad Trans entregar tarjetas de mercado a las hermanas para comprar alimentos en las tiendas de Arauca.

“Con eso ya tenían para solventar la alimentación por seis meses”, advierte Tamara. También se acercaron a las mujeres trans en sus entornos de trabajo nocturno para censarlas y brindarles información sobre sus derechos. Crearon la Patrulla Trans.

“Todos los sábados por la noche vamos con una planilla anotando a las chicas y repartiendo preservativos y lubricantes”, explica Tamara. La mayoría de las personas trans que anotan en la lista trabajan en la prostitución. “Lo hacemos, primero, para darles un tema de autocuidado y, segundo, para caracterizar quiénes son las que se quedan y las que se van”, menciona.

Le han puesto la Patrulla porque los policías y la fuerza pública colombiana, que llega en sus carros patrullas a las zonas donde se prostituyen las mujeres trans en Arauca, son los que las requisan o las expulsan, a veces violentamente. “Yo tengo demandada a las fuerzas públicas acá en Arauca porque sufrí un tema de tortura de parte de la policía”, dice Tamara.



Aunque aprendieron a vivir como soles aislados, Zafiro dice que en la dignidad encontraron una nueva forma de vivir. “He cambiado mucho, porque me siento más segura, más linda, más empoderada para enfrentar la realidad del mundo que estamos viviendo”.

Cuenta de los diplomas que ha obtenido desde que conoció a Dignidad Trans. “A este le conseguí un marquito lo más de cachezudo y se lo puse”, dice y suelta una risa, orgullosa. Hace un año volvió a sacar los implementos de peluquería que tenía arrumados y reorganizó *Zafiro Peluquería*.

La dignidad es algo que va más allá de los sueños de Zafiro o del nombre que tiene la fundación. “Tener que hablar de dignidad, del respeto, la dignidad que merecemos como personas, es un imperativo”, advierte Cristina. No se trata de pedir tolerancia, insiste. Lo que exigen es que se respeten sus derechos. Saben que si no lo hacen ellas, nadie más lo hará. Que si ellas no se miran diferente, nadie más lo hará. “La gente se queda mirándote como si fueras el puto *freak* del circo”, dice. Eso, al menos en Arauca, está comenzando a cambiar.



En Cuba la resistencia al fundamentalismo también puede ser un acto de fe

Crónica: Lirians Gordillo Piña / Fotos: Carla Valdés León y Emilio Suárez González

2022 ya genera expectativa en Cuba. Será el año en que definirán a través de un referéndum el nuevo Código de las Familias: una serie de transformaciones legales para que los derechos se extiendan al colectivo LGTBIQ+, se reconozcan los aportes sociales de las tareas de cuidados y se aborden las violencias machistas. En esta antesala, desde hace un tiempo sectores antiderechos afilan sus campañas de desinformación discriminadora. Pero hay resistencia y toma muchas formas, también dentro de los sectores de fe: el activismo y la conversación en el ecosistema digital, en la calle y en la vida cotidiana. Este texto forma parte de *Las resistencias fundamentales* un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista.



A Yuliet, Dachely y Jorge los [fundamentalismos religiosos les pasaron por el cuerpo](#). No es que hayan sido sometidos a un exorcismo, como les ha ocurrido a personas trans de comunidades de fe, pero sus vidas están atravesadas por las resistencias a los fundamentalismos. Aunque los discursos antiderechos aterrizaron en la isla del Caribe en la década del noventa del pasado siglo, la posibilidad de incluir el matrimonio igualitario en la Constitución de la República en 2019 fue el pretexto que utilizaron iglesias fundamentalistas para clonar campañas a favor de la [familia original](#), manipular los principios de la educación integral de la sexualidad, asumir el discurso sobre la “ideología de género” y manifestar un programa político de claras conexiones con movimientos regionales. La resistencia al avance de la agenda antiderechos toma muchas formas: las transformaciones legislativas, la conversación en el ecosistema digital, en la calle y en la vida cotidiana. La resistencia a los fundamentalismos es fundamental y, a veces, un acto de fe.

Yuliet Teresa Villares es una joven editora que reside en la provincia Ciego de Ávila, en el centro del país; es, además, activista y mujer de fe. En medio de las disputas políticas por los derechos de las disidencias sexuales, Yuliet publicó un post en Facebook que analizaba la creación de la [Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas](#), donde se reúnen actores nacionales con posturas fundamentalistas. Como [mujer lesbiana, negra y de izquierdas ya había vivido el rechazo](#) de su comunidad de fe; pero aquel post superó lo vivido, su activismo digital la expuso a otra dimensión del [discurso fundamentalista](#).

“Ante eso una tiene que hacerse de resistencias personales. Al principio sí discutía, pero después decidí no hacerlo a no ser en casos muy específicos, porque te hace daño y tienes que cuidarte, si no la lucha no llega a ser funcional”, cuenta Yuliet.



CUBA

Yuliet en la iglesia Ebenezer de Marianao (IBEM) en La Habana.

Desde la capital del país a Dachely Valdés Moreno también se le revuelve el alma ante los comentarios, insultos y etiquetas que relegan a su familia al ámbito de lo vedado. A esta psicóloga clínica, madre lesbiana y activista le es inconcebible la ausencia de empatía en la retórica antiderechos.

“Recuerdo que mi respuesta ante un comentario fundamentalista en las redes era muy visceral. Me ganaba por completo, me poseía y el corazón me latía muy rápido, enseguida moviendo los dedos, lista para teclear y responder. Y aunque no siempre lo hacía con un texto, mi cuerpo sí se ponía como muy presto a la defensa”, rememora.





Dachely, Hope y Paulo.

Por su parte, [Jorge González Núñez](#) sabe de esa confrontación digital, pero vive cotidianamente otros encuentros más retadores fuera del escenario virtual. Al ser activista gay, integrante de diversas iniciativas ecuménicas y presidente del [Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba \(MEC\)](#), se preocupa constantemente por el muro irracional de los fundamentalismos religiosos. Tanto en su natal Cienfuegos, en Matanzas o La Habana –ciudades que le acogen por su activismo cristiano y LGBTIQ– intenta mantener un centro que permita traspasar los prejuicios.

“En cualquier lugar puedes encontrar un discurso fundamentalista, pero cuando lo tienes frente a ti te paraliza, es mucho más difícil. Se da, además, en lugares en los cuales pretendes crear consenso, pero estos discursos cierran el paso a todo diálogo, porque no reconocen en la experiencia de la otra persona una verdad”, ensaya.



Jorge González Núñez



Jorge, Dachely y Yuliet confirmaron las sospechas; las resistencias fundamentales pasan por el cuerpo, en un proceso de aprendizaje que luego se extiende a la familia, personas cercanas y colectivos de activistas. La resistencia también se aprende y se contagia.

“La primera es la resistencia personal y del autocuidado. La segunda es la resistencia familiar. Tal vez hace 10 años mis viejos no tenían celular ni internet, eso es algo relativamente nuevo en Cuba; pero hoy todo el mundo está conectado. Esas resistencias pasan entonces por cuidar a tus familiares, que comprendan que esta es una lucha de a poquitos. Y la tercera resistencia está en las redes humanas de cuidado mutuo, esas alianzas que logras hacer con gente que está en la misma lucha”, reconoce Yuliet.

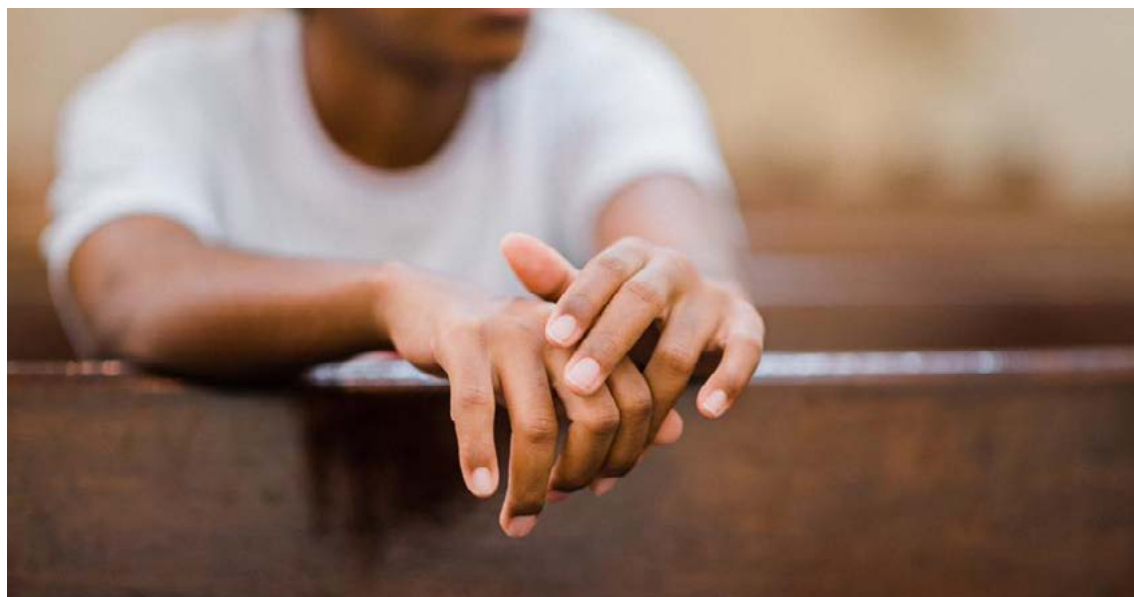
Jorge vive con su novio Adiel García –profesor universitario y activista– y Mao, el gato de ambos. Para ellos el momento del café es el placer de despertar al otro en las mañanas, es la oportunidad de conversar en las tardes y ganar energías para seguir trabajando en las madrugadas. Aunque Adiel no profesa ninguna religión, Jorge reconoce en él una espiritualidad profunda.

“Compartimos una espiritualidad alrededor de la fe y la vida, desde la militancia que quiere transformar el mundo; que para él es el socialismo y para mí también, pero desde el Reino de Dios”, cuenta Jorge despacio como quien se deja estar en cada palabra.

“Mi vida es bastante agitada. Siempre tengo algo que hacer a la par de Pauli: mi trabajo con [Lo Llevamos Rizo](#) y en pos de la cultura afrocubana y nuestra identidad; mi trabajo como terapeuta y el activismo. Casi no tengo tiempo libre. Si no estoy escribiendo, estoy revisando algo o buscando contenido o creándolo, o reunida. Pauli ocupa mucho de mi tiempo y trato de hacerlo parte en lo que es posible de mis dinámicas de trabajo para compartirlo todo con él”, lista a trote Dachely.

Para Yuliet la música es vital y dice que la ve “en colores”. Aunque vive sola desde hace cinco años, no está en soledad. Ella se define como una diestra “con el corazón a la izquierda por vocación”; una mujer amante de descubrir cosas. “Soy una friki de la tecnología y padezco levemente de TOC (trastorno obsesivo compulsivo)”, cuenta.

Estas tres personas se unen como en una cadena de energías. La conversación, el camino, la fe en un mejor futuro y la música fluyen y las conectan. Se trata de gente tierna y resiliente. Pero no viven de espaldas al miedo. Los fundamentalismos, la ausencia de sensibilidad y empatía, la instrumentalización, incluso perderse mientras luchan, son miedos comunes.



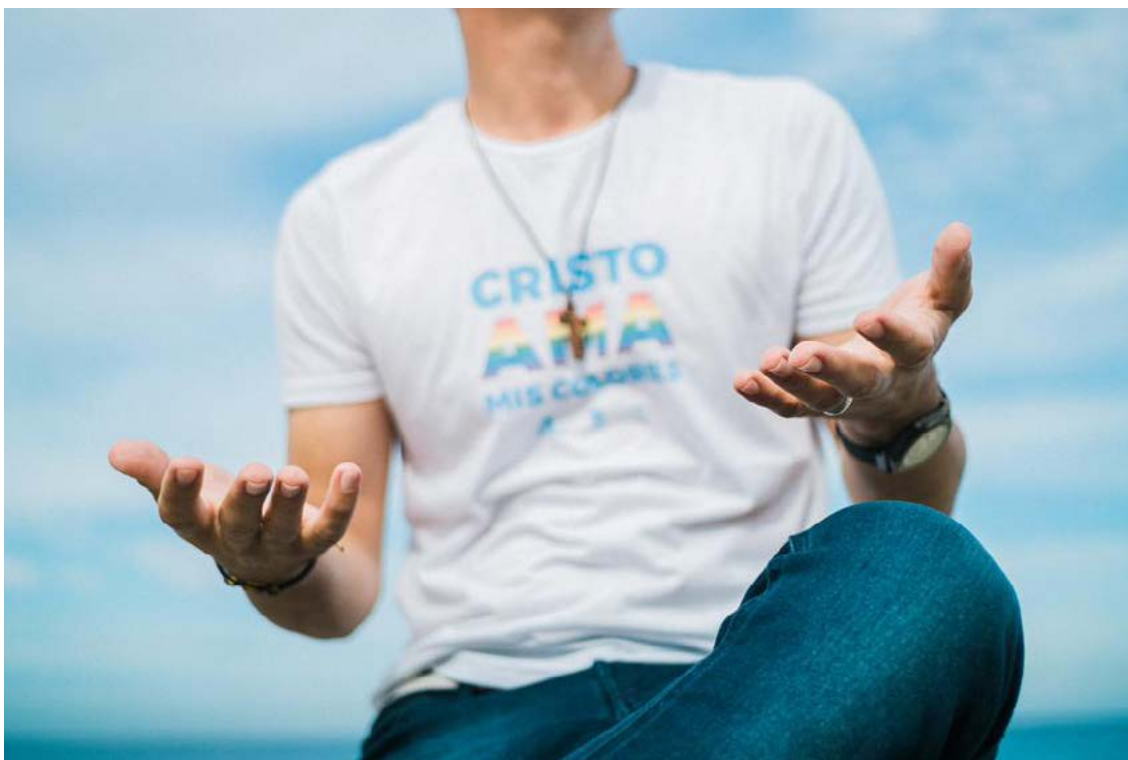
Yuliet en la iglesia Ebenezer de Marianao (IBEM) en La Habana.



“¿A qué temo? A que el discurso fundamentalista, religioso y de todo tipo, se apodere del país. Me da miedo porque en la defensa de esos valores las sociedades se estandarizan bajo patrones de los que tienen el poder. Ahí no cabemos los disidentes de ningún tipo, ni los sexuales, ni los políticos, ni los religiosos, ni los negros, ni las mujeres. Le tengo miedo a la desesperanza que implica que la solución definitiva sea huir de Cuba. Le tengo miedo a la distancia y a no ser parte”, reflexiona Dachely.

“Le tememos a la manipulación de términos y conceptos como justicia, democracia, derechos humanos. Hoy día vemos cómo se sostienen muchos discursos que para nada son democráticos y dicen serlo. Y que lejos de construir una Cuba mejor terminan reproduciendo patrones capitalistas, que para nada reconocen la dignidad de los seres humanos y que son parte de ese discurso hegemónico que se quiere imponer”, agrega Jorge.

“Me temo a mí, a que pueda tomar alguna actitud o aptitud fundamentalista, temo a perder la ternura mientras lucho”, confiesa Yuliet.



Jorge González Núñez

En este viaje complejo han encontrado redes de apoyo y cuidado, alianzas y espacios propios para sus luchas. De salirle al choque a todo comentario antiderecho hoy comparten proyectos que apuestan más por compartir sus propias propuestas y transformaciones.

Dachely se apoya en el conocimiento científico y las historias de vida como contraargumentos útiles para otros públicos, grupos sociales e incluso las autoridades responsables de legislar sin ausencias, ni prejuicios. En 2021 impulsó junto a un grupo de amigas y activistas la campaña [Ahora Sí](#), que en distintas provincias del país apoya la aprobación del Código de las Familias.

Yuliet deja ver mucho más su sonrisa cuando habla de la familia que ha encontrado en los proyectos y plataformas que ahora mismo la desvelan: la plataforma [Voces Ecuménicas cubanas](#), el [Movimiento Estudiantil Cristiano \(MEC\)](#) y la red [Fe por Cuba](#) del [Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr.](#)

Jorge comparte con Yuliet el activismo en el MEC, la organización impulsó +Amor+Derecho una campaña que no buscaba la confrontación, sino que posiciona un mensaje de diversidad desde una mirada teológica.



Juntando voces, espacios y agendas fundamentales

En Cuba la punta de lanza de la arremetida antiderechos es contra las disidencias sexuales, su existencia misma y su participación en la sociedad cubana actual. Esta realidad ha impulsado al activismo LGBTIQ+ a ser protagonista de las resistencias, apoyado por diversas [instituciones comprometidas](#), [colectivas](#), [espacios](#) y [medios feministas](#) que se han sumado a la denuncia y deconstrucción de las agencias fundamentalistas y los retrocesos sociales, consustanciales a su programa político.

En el escenario digital conviven campañas y grupos dedicados a pujar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, decididos a mostrar que es posible una sociedad plural, radicalmente diversa y plena en derechos.

Ahora Sí, Hasta que el amor sea ley, #Todoslosderechosparatodaslaspersonas, +Amor+Derechos, Cristo Ama Mis Colores, Plataforma 11M, EntreDiversidades, Voces Ecuménicas Cubanas, Red Ecuménica Fe por Cuba, Red Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, TransCuba, Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba, son algunas de las campañas, etiquetas en redes sociales, grupos y plataformas ecuménicas que continúan una larga tradición de activismo, disputan el escenario digital y toman la calle en diferentes provincias del país.

Las disidencias sexuales han aprovechado la apertura y la aparente democratización que promete internet. No esperan para alzar la voz y toman la palabra desde sus propias experiencias, denuncian la homofobia donde quiera que se plante, movilizan y crean [medios periodísticos](#) con agendas propias y [revistas](#) con un discurso radical para su empoderamiento.

Jorge, Dachely y Yuliet participan de varias de estas iniciativas y reconocen que asumir una postura propositiva, creativa, basada en las experiencias de lesbianas, trans, gays y personas no binarias es un camino necesario para ganar en solidaridad y respeto.

En esos empeños, Dachely siente la ausencia del posicionamiento de sociedades científicas respecto a los mitos y prejuicios heteronormativos. Invita también a construir y socializar de manera creativa pensando en los diversos segmentos de público y mostrando sin tapujos las historias de vida de la población LGBTIQ+ desde una mirada interseccional.

Justamente, Jorge participó en la realización de ocho podcasts para la campaña Cristo Ama mis colores de la [Iglesia de la Comunidad Metropolitana \(ICM\)](#) en Cuba, que reivindica voces de personas LGBTIQ+ desde la fe.

“Conocimos testimonios de personas que vivieron al límite, que fueron expulsadas de sus casas, de sus iglesias, que vivieron procesos de exorcismo porque supuestamente tenían un demonio dentro”, lamenta. Esa experiencia le ratificó cuánto falta para saldar la deuda con las personas trans, en las familias, las iglesias, las comunidades y el estado.

“En nuestros espacios existen personas con identidades trans y debemos construir resistencias junto a ellas; lecturas de la Biblia que las dignifiquen y las tengan en cuenta desde sus propias experiencias, desde lo que tienen para contarnos, porque también hacen teología, tienen su experiencia con Dios que es única, que no puede ser suplantada”, afirma Jorge.

Cuestión de derechos y de justicia

La lucha legal es otro frente de resistencias a los fundamentalismos en Cuba, con fallos históricos y enfrentamientos. En 2019 Dachely Valdés y Hope Bastian se convirtieron en [la primera pareja de madres lesbianas en inscribir a su hijo en el Registro Civil cubano](#), luego de acceder a un tratamiento de reproducción asistida en el extranjero. Esta noticia fue antecedida por [otro fallo revolucionario](#): en 2017 [Eunice Violeta Cardoso](#) logró la custodia de sus nietos luego de que falleciera su hija Violeta, madre de dos niñas y un niño; ahora los tres viven junto a Cardoso e Isabel Pacheco, su pareja por 34 años.





Dachely, Hope y Paulo

Tres años después, en 2020, el reconocido activista Alberto Roque dio un paso inédito en el activismo LGBTQ+ al presentar una [demanda penal por injuria](#). Roque denunció a la cantante Danay Suárez, quien reprodujo en su [página oficial de Facebook](#) un post que equipara la homosexualidad con la pedofilia. El proceso tomó curso en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana y terminó a favor de Suárez, sin embargo, generó un debate sin precedentes sobre libertad de expresión, discurso de odio y respuestas legales a este tipo de violencia en redes sociales.

“Las resistencias han sido en las calles y en las redes, ha sido mucha y seguirá siendo así porque nos queda el Código de las Familias por aprobar y luego la ley de identidad de género. Incluso aunque aprobemos las leyes, que es super vital e importante hacerlo, nos queda la implementación del [Programa Nacional de Educación Integral de la Sexualidad](#) y los imaginarios de las personas”, reflexiona Dachely.

Cuba se prepara para someter a debate y referéndum popular en 2022 un nuevo Código de las Familias, que elimina toda discriminación por orientación sexual en el matrimonio, la adopción y el acceso a técnicas de reproducción asistida. El anteproyecto de ley incluye otras demandas como la eliminación del matrimonio infantil, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el abordaje en la ley familiar de la violencia de género e intrafamiliar, el derecho de las mujeres a decidir el momento de tener descendencia y el número, además de la protección específica de poblaciones en situación de vulnerabilidad como personas mayores y en situación de discapacidad.

El [activismo LGBTQ+](#) es una fortaleza para la nación cubana frente a los fundamentalismos religiosos. Sin embargo, enfrenta continuas incomprensiones, tensiones internas, la resistencia y sospecha estatal ante el asociacionismo independiente, el acoso político que llega a la criminalización en algunos casos y la instrumentalización de las luchas antiheteropatriarcales y antirracistas, en función del diferendo Estados Unidos-Cuba.

Para Yuliet, las resistencias deberían tomar el cuerpo de la nación toda. Sueña la isla como “ese espacio de resistencia general” que supera los discursos de las grandes ciudades y habita también en los espacios rurales, los pequeños urbanismos donde se vive y se funda. Mientras esas utopías se rebelan, ellas y él siguen resistiendo desde la felicidad y los miedos.

Ante la prohibición del aborto en El Salvador, ellas luchan por la libertad y la despenalización social

Crónica: Fátima Cruz / Fotos: Kellys Portillo

Es larga la lista de derechos pendientes y demandas a las que todavía no se ha dado respuesta en El Salvador. Sin embargo, la lucha para que se termine la prohibición del aborto es uno de los temas alrededor de los que se organiza con fuerza el activismo feminista y de derechos humanos. Desde el surgimiento de la campaña *Las 17 y más* han recobrado la libertad de 62 mujeres que estaban presas injustamente. Cada vez son más en las calles, en cada marcha y, a su vez, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela, que condenó a El Salvador por encarcelar a una mujer que sufrió un evento obstétrico, marca un hito y le da la razón al movimiento feminista y de derechos humanos que viene denunciando el impacto de la prohibición. Este texto forma parte de *Las Resistencias Fundamentales* un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista.



—¿Por qué nos ponen esta barricada? Esta forma tan violenta de recibir. Somos ciudadanas. Tenemos derecho de estar aquí. ¡Les exigimos que quiten esta barricada! ¡Permitan el diálogo ciudadano!

Con el micrófono en la mano, varias activistas y defensoras de derechos humanos gritaban frente al alambre de púas; los hilos gruesos de metal que se entrelazan con pequeños nudos de púas tan tradicionales en Centroamérica como forma de seguridad, rodeaban al edificio de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en la capital. Funcionaban como una barrera material y simbólica entre la marcha de mujeres y quienes representan al pueblo. Eran las 8 de la mañana del último 28 de septiembre de 2021, Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto y las manifestantes habían llegado con una propuesta: la Reforma Beatriz, que pretendía modificar el artículo 133 del Código Penal para incluir la despenalización del aborto en tres causales. La bienvenida que les dio la Asamblea fue hostil pero finalmente salieron dos diputadxs: una del FMLN y otro de Nuestro Tiempo, quienes introdujeron la solicitud a la comisión respectiva. Esa iniciativa quedó archivada pero no fue la primera ni será la última vez que las salvadoreñas organizadas exijan una transformación del estado de situación: su historia de lucha es un recorrido de insistencias.



Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en la marcha del 28S.

Es larga la lista de derechos pendientes y demandas a las que todavía no se ha dado respuesta en El Salvador: sin embargo, la lucha para que se termine la prohibición, penalización y criminalización del aborto es uno de los temas alrededor de los que se organiza con fuerza el activismo feminista y de derechos humanos. Desde 1998 el Código Penal prohíbe totalmente el aborto. En códigos salvadoreños anteriores existían excepciones que hoy ya son parte del pasado. Además, en la Constitución de la República se agregó un candado en el primer artículo que señala: “Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Con la prohibición, desde hace 23 años que se da una puja entre los movimientos feministas y de derechos humanos que intentan desbloquear estos límites a las libertades de niñas, adolescentes y mujeres gestantes salvadoreñas; y grupos políticos, partidarios, religiosos, entre otros, que se han encargado de poner aún más alambre de púas a las iniciativas e impedir los esfuerzos por despenalizar el aborto por causales. En esa disputa el 2021 termina con un hito que le da la razón a las organizaciones feministas y de derechos humanos y es resultado de esa persistencia en las luchas. El 29 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a El Salvador por la criminalización de



una mujer que pidió ayuda en medio de una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado y murió en la cárcel sin atención médica. Se trata de [Manuela](#). Su nombre se volvió bandera en las manifestaciones y un caso que traspasó las fronteras de El Salvador. Ahora hay un fallo que ratifica lo que venían diciendo su familia, las organizaciones que acompañaron el caso y el movimiento feminista: el Estado se equivocó al encerrarla y condenarla luego de sufrir una emergencia obstétrica, negarle acceso a la salud y dejarla morir al no brindarle un tratamiento adecuado para el cáncer que padecía. El caso Manuela plantea un horizonte de justicia y esperanza en el país más pequeño de Centroamérica.



Intervención callejera Manuela Justicia y Esperanza

“Nosotras decimos: Manuela justicia y esperanza porque es una historia que atraviesa una serie de violaciones de derechos humanos. No queremos que se repita. Queremos justicia para ella y para su familia. Esperamos que se establezcan medidas de no repetición. Hablamos de esperanza porque su historia y todo el proceso de lucha puede significar transformaciones para todas y cambios para las compañeras que están privadas de su libertad”, dice Sara García, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Esta organización junto a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) empujaron la historia de Manuela para que saliera de los límites de El Salvador y llegara a instancias internacionales. “Manuela vrs El Salvador” es el primer caso en llegar a la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) que muestra el impacto de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres y en sus familias.

El hijo mayor de Manuela, Jesús Hernández, se sienta junto a su abuela. Y desde ahí, con voz firme, empieza a recordar a su mamá, el camino que han transitado para demandar justicia y restituir la dignidad al nombre de su madre: “Que se haga saber a la gente que mi mamá no fue la culpable sino que fueron la policía, doctores y todos lo que hicieron esto para que ella fuera condenada y sufriera todo lo que sufrió. Eso es lo que yo quisiera. Hay gente que dice que ella fue la culpable pero no, en esta vida todos somos de carne y hueso y no sabemos lo que nos puede pasar. Mediante la resolución no van a andar diciendo que ella quiso hacer lo que dicen que hizo. A mí me repara que se diga que ella no fue la culpable de eso porque yo cuando estaba chiquito eso decían. A mí me pone la mente en alto el sentir que mi mamá no fue la culpable”.



A su madre, Jesús la recuerda como una persona “bien cariñosa”. “Ella nos quería, a mí y a mi hermano, cómo ella iba a querer dejarme votado. Me cuenta la abuela que la última vez que la pudo ver le dijo que cuidara de nosotros. Ese amor siempre lo tuvo porque aunque ella no estaba con nosotros quería que no fuéramos a sufrir a otra parte sino que nos había dejado con mi abuela”, dice el joven de 22 años que creció con su madre presa por un delito que no cometió.

“Lo que espero es que no se vuelva a repetir, así como mi mamá que sufrió y aguantó. Espero del sistema de salud que a quienes llegan enfermos no los maltraten. Es lo que nosotros queremos: que no se destruyan más familias porque se destruye toda una familia, así como nos pasó a nosotros. Si uno va a la clínica es para que le den medicina no para meterlos presos”, agrega.

Manuela era una mujer de la zona rural. No sabía leer ni escribir y vivía en situación de pobreza. Tenía dos hijos: de 9 y 7 años, era madre cabeza de familia. Nunca tuvo acceso a educación formal, a información y servicios de salud reproductiva, como métodos anticonceptivos. Sus dos primeros partos fueron en su propia casa. Ella era originaria de uno de los departamentos más pobres del país y esa situación parece no cambiar, ya que aún para 2018 la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía (MINEC) colocaba a Morazán como el segundo departamento con una elevada pobreza económica con el 35.99% y pobreza multidimensional con el 42.10%.

Entre 2006 y 2007, Manuela empezó a sentir constantes dolores de cabeza y estómago, náuseas y cansancio. Tenía masas visibles en el cuello. En la Unidad de Salud le diagnosticaron gastritis y le recetaron analgésicos. Pero nunca le realizaron algún examen para establecer el origen de sus padecimientos. En ese lapso Manuela quedó embarazada. En febrero de 2008, empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal y fue a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa. En ese momento tuvo una emergencia obstétrica, expulsó un feto y se desmayó. Mientras estaba inconsciente su familia buscó auxilio y la llevó hasta el hospital más cercano, ubicado a dos horas de distancia.

Manuela llegó al hospital envuelta en una hamaca, con hemorragia severa y síntomas de preeclampsia. En lugar de recibir la atención obstétrica de urgencia, fue interrogada por la doctora que la recibió posponiendo su atención durante tres horas. La médica asumió que se había provocado un aborto y dio aviso a las autoridades policiales. Al día siguiente, Manuela continuaba con un delicado cuadro de salud y sin la presencia de un abogado defensor fue interrogada por dos agentes de la policía, la acusaron de haber matado a su hijo. Sin orden judicial la detuvieron y la esposaron a la camilla, así permaneció por siete días, mientras recibía insultos por parte del personal médico.

Manuela no tuvo la posibilidad de contratar a un abogado. Contó con tres defensores públicos distintos, con quienes solo tuvo contacto durante el mismo día de la audiencia y no escucharon su versión de los hechos o a sus familiares. Además, estos abogados nunca cuestionaron la coerción policial ejercida contra su padre, quien no sabía leer y fue obligado a imprimir sus huellas dactilares en un documento que luego resultó ser una denuncia fraudulenta contra su propia hija.

El Tribunal que condenó a Manuela a 30 años de cárcel creyó que ella había lanzado a su hijo a una letrina para esconder una supuesta infidelidad y evitar la crítica pública. También planteó que el “instinto maternal” debió haberla llevado a buscar atención médica. El defensor público de Manuela no presentó ningún recurso contra la decisión. Un año después de la condena fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin pero no recibió la quimioterapia que requería. Manuela murió en el hospital, engrilletada, custodiada por policías, sin haber visto a su familia mientras permaneció en la cárcel y en el centro de salud. Dejó a sus hijos huérfanos.

En octubre de 2021, [la CIDH presentó el informe Situación de Derechos en El Salvador](#), que menciona la preocupación de la comisión al encontrar indicios de posibles violaciones del proceso, como violaciones al principio de presunción de inocencia al haber sido todas las mujeres tratadas como responsables del asesinato de sus hijos desde el inicio de las diligencias; la imposibilidad de defenderse, de ser oídas por el juez o de tener representación legal; posibles incumplimientos al principio de la proporcionalidad de la pena y del trato individualizado de cada uno de los casos; sentencias dictadas sin pruebas científicas u objetivas concluyentes en contra de ellas, en juicios permeados por estereotipos de género discriminatorios contra ellas por su condición de mujeres, al ser tratadas de malas madres y asesinas de hijo por los propios jueces.



La [sentencia](#) en el caso Manuela solicita al Estado una batería de medidas para reparar de manera integral: la publicación de la sentencia, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, otorgar becas de estudio al hijo menor y al hijo mayor de Manuela; brindar gratuitamente tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a la familia. A nivel estructural también hace pedidos expresos para regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica; desarrollar un protocolo de actuación para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas; adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva; diseñar e implementar un curso de capacitación y sensibilización a funcionarios judiciales y al personal de salud del Hospital Nacional Rosales; adecuar su regulación relativa a la dosimetría de la pena del infanticidio; diseñar e implementar un programa de educación sexual y reproductiva; tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas, entre otras.

Esta es una sentencia histórica y un logro de la lucha que por años han sostenido la familia de Manuela y las organizaciones feministas. Sara García dice que “esta sentencia es histórica porque se ha condenado al Estado salvadoreño por la persecución, detención arbitraria y muerte de Manuela. ¡Manuela era inocente!”. Asimismo, esta resolución es un hito en la región y coloca a El Salvador como el primer Estado en ser condenado por criminalizar a mujeres con emergencias obstétricas.

Tras el fallo, el hijo de Manuela dijo: “Nos sentimos contentos. Me siento muy contento porque por mucho tiempo hemos venido luchando y ahora me siento orgulloso de ser hijo de Manuela, a pesar de todo lo que a mi mamá le culparon, ahora es esto muestra que no hicieron bien. No investigaron que ella estaba enferma y que podía dejar a sus hijos huérfanos. Yo le pido a todo El Salvador que entienda lo que hicieron con mi mamá y con muchas mujeres, me duele por haber perdido a mi mamá y hay niños que tienen a sus mamás presas. Me siento agradecido con lo que la Corte ha hecho. Se ha hecho justicia. El nombre de mi mamá se ha limpiado. Me siento dichoso de ser hijo de Manuela”, [expresó a través de una conferencia de prensa](#).

La historia de las 17 y más ...



Intervención de la colectiva Las 17 y más



La lucha por Manuela tuvo la fuerza internacional que consiguió y se convirtió en un hito porque detrás hubo una campaña que no se puede dejar de nombrar: Las 17 y más. Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, recuerda que la campaña de las 17 nació cuando un grupo de activistas, entre las que ella estaba, empezó a conocer cada vez más historias de mujeres que habían enfrentado emergencias obstétricas y que debido a las normativas estaban perdiendo gran parte de su vida en una cárcel. Fue a partir de una publicación periodística que se titulaba: “Bienvenido al Salvador del siglo XXI”, el Estado antiaborto, de un periódico estadounidense, de 2006. La investigación planteaba que había mujeres con penas de 30 años por aborto. En ese momento las activistas se preguntaron ¿cómo es posible que mujeres estén condenadas por esos años si el aborto en el país se condena con ocho años? Investigaron hasta que dieron con la historia que mencionaba el artículo: se llamaba Karina y fue la punta del ovillo para encontrar más y más empezar a formar la organización feminista alrededor de la libertad de las presas. Fueron cuatro años de lucha hasta que en julio de 2009 lograron devolverle la libertad a Karina, quien había estado detenida 7 años y 5 meses. Durante esa experiencia entendieron cómo funcionaba el proceso de sentencias en la cual al inicio se condena por aborto pero al final el delito se convierte a homicidio agravado, incrementando las penas a 30 años o más. “Ella sale de la cárcel por el mecanismo de revisión de sentencia. Al salir, visibiliza que no es la única que fue condenada bajo ese sistema sino que hay muchas más pero que no hablan debido a la violencia que se ejerce hacia ellas”, explica Herrera.

A partir de ese primer caso, las historias que fueron encontrando se plasmaron en tres investigaciones que se llamaron “[Del hospital a la cárcel](#)” y se enfocaban en “documentar los impactos de la actual legislación sobre aborto en el ámbito penal, así como en identificar el perfil de las mujeres que se ven involucradas en procesos judiciales por acusaciones de aborto o casos relacionados”. El mecanismo del Estado para criminalizar a las mujeres quedó al descubierto.

En un comienzo lograron identificar a 17 mujeres que contaban con características similares para presentar sus casos de forma colectiva. Decidieron optar por la figura del indulto para buscar su liberación y es entonces donde surgió *las 17, no dejemos que su vidas se marchiten*. Morena Herrera recuerda que desde ahí nace la representación y la voz de las mujeres que cumplían con los requisitos para optar por el indulto, pero aún había más. “Se logró la libertad de Mirna y de Guadalupe. Sin embargo, grupos fundamentalistas obstaculizaron otros indultos. De 17 obtuvieron su libertad dos mujeres en ese momento”, cuenta.

En la primera investigación que hicieron lograron hallazgos claves para entender quiénes eran esas mujeres procesadas: la mayoría de ellas eran jóvenes pobres de entre 18 y 25 años; un 27 % tenía muy bajos estudios, analfabetas o con primer ciclo; el 52 % no recibía ningún tipo de salario o ingresos económicos, el resto son empleadas domésticas, obreras, o desempeñan oficios cuyos ingresos no superan el salario mínimo. Y un dato significativo: el 74 % de ellas afrontaba sola esta situación, no asumiendo ninguna responsabilidad el hombre que provocó el embarazo.

Cinthia Rodríguez es del grupo de las 17. Fue condenada a 30 años de prisión y lograron su libertad el 8 de marzo de 2019 por Conmutación de pena, que consiste en un perdón por parte del poder Estatal. Ella recuerda que se sintió feliz cuando le notificaron su libertad: “Cuando me dijeron usted va a salir libre mi corazón sintió alegría. Ese día salimos tres y empezamos a escuchar la “bulla” de muchas personas que habían estado luchando por nuestra libertad. Comenzaron a cantar que nos querían libres: sentí mucha emoción. Pero a la vez sentí tristeza por mis otras compañeras que aún quedaban en la cárcel. Y yo sé que pronto van a salir y les van a dar la oportunidad de reunirse con sus familias”.

En ese sentido, Cinthia explica que sus compañeras son inocentes como ella y que no deben estar en esa situación, ella estuvo en condición de cárcel por 10 años con nueve meses. “Estando acá afuera siento aún más fuerzas y ánimos para apoyarlas. Sé que por medio de contar nuestras historias, como esta entrevista, se dé a conocer todo lo que hemos pasado y eso puede ser un apoyo para ellas. Así las personas se den cuenta de lo injusto que es que ellas aún estén ahí adentro”.

Pero, ¿qué significa recobrar esa libertad? Para Cinthia fue volver a soñar y plantearse metas. Entre ellas: estudiar una carrera universitaria en el área de mercadeo más adelante y obtener un empleo formal. Sabe que este último objetivo es difícil porque tiene antecedentes penales. Actualmente tiene su propio negocio al que está enfocada cada día y se esfuerza por mejorar. También posee sueños para sus compañeras: “mi corazón desea verlas pronto afuera y que podamos reunirnos nuevamente. Que ellas puedan disfrutar de sus familias, hay muchas que tienen hijos que no han podido ver a lo largo de muchos años”.



Por otro lado, Cinthia demanda a la sociedad ser empática y respetuosa con la situación de las mujeres que se encuentran en prisión, ya que también existe estigma hacia ellas. Asimismo, pide a jueces que investiguen sin estereotipos de género estos casos para que escuchen cómo han sucedido desde las voces de las mujeres. Además, los exhorta a darles una oportunidad a sus compañeras ya que tienen el derecho a su libertad.

La campaña hoy atraviesa una segunda etapa: Libertad para las 17 y +. En este sentido, hasta el 2021 han recobrado la libertad de 62 mujeres -de un total de 181 casos identificados- por diferentes mecanismos y estrategias como: revisiones de sentencias, indultos, conmutaciones de penas, beneficios penitenciarios y en algunos casos defensa antes de la condena. Los esfuerzos no se acaban. Morena Herrera asegura que próximamente se lanzará otra etapa de esta campaña.

El sistema de salud debe creerle a las mujeres

—Vas a estar libre, cuando me dijeron esto me llené de emoción y alegría. Las personas que conocieron mi caso estuvieron acompañándome e informándome de cómo iba mi caso.

Imelda Cortez es del grupo de las 17 y más y recuperó la libertad que nunca tendría que haber perdido en diciembre de 2018. Ella soñaba con seguir estudiando. Pronto comenzará la carrera que siempre quiso hacer desde pequeña: enfermería. Desde ese lugar espera apoyar a las mujeres para que reciban un servicio adecuado. “Desde mi experiencia fue un tema de salud y quienes hacen llegar a estos lugares (cárcel) es en parte por el personal médico porque la mayoría que llegamos ahí fue por la denuncia del personal médico. En nuestro país el sistema de salud debe de creer en lo que dicen las mujeres”, cuenta. Lo anterior, corresponde a que debido a la legislación no se resguarda el secreto profesional que representa un deber en la profesión médica, ya que se les presiona para denunciar estos casos.

Al igual que Cinthia dice que la sociedad debe cambiar la actitud hacia las mujeres criminalizadas. “Volver a comenzar me costó mucho porque cuando una está marcada por algo así la gente nos discrimina. Somos las personas más señaladas en el mundo. A veces se escucha que nos dicen: la mata niños y similares. Es difícil. Pero, seguimos adelante porque también creemos que eso no nos tiene que detener. ¡Soy inocente! Por eso no me detengo para cumplir mis sueños”.



Imelda Cortez fotografiada por Fátima Cruz.



La experiencia feminista desde la campaña de las 17+ y el caso de Manuela son hitos importantes porque muestran que es posible buscar justicia para las mujeres y sobre todo demandar cambios profundos para que no se repitan violaciones de derechos. Las transformaciones fueron posibles gracias a la acción colectiva nacional e internacional de las organizaciones feministas y de derechos humanos que inspiraron a la construcción de nuevos espacios como la organización Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, que realizan incidencia en los hospitales, hablan sobre el secreto profesional y están en comunicación con organizaciones feministas y de derechos humanos en caso de conocer alguna denuncia para que las mujeres tengan una defensa justa. En este sentido, los avances son más evidentes en la acción social y no gubernamental, según Morena Herrera: “Existe la conciencia en las personas de que esa es una injusticia, ya que las mujeres acuden a los hospitales para pedir ayuda”.

Para la activista, se está avanzando en la despenalización social, aunque por el momento no se logre abrir la puerta en Órganos del Estado como la Asamblea Legislativa. Ella resume: “Ese logro también se debe a la fuerte convicción en que las mujeres vamos a ser libres, en la medida en que todas podamos decidir sobre nuestras vidas, desde ahí viene la fuerza”. La fuerza feminista en El Salvador no se acaba.



Frente al negacionismo de la pandemia las mujeres brasileñas se organizan para sostener la vida

Crónica: Helena Zelic / Fotos: Elaine Campos

La Marcha Mundial de las Mujeres es una de las organizaciones populares que, en el contexto de la pandemia, tuvo que articular su acción política con un esfuerzo permanente de solidaridad: cuidando a las compañeras que no tenían para pagar las cuentas, que pasaron por el duelo y por sufrimientos psíquicos y emocionales. Organizaron donaciones, distribuyeron canastas básicas, productos de aseo personal artesanales y alimentos agroecológicos. La Marcha Mundial de las Mujeres une a las mujeres cis y trans de la ciudad, que reciben, y a las del campo, que producen. Este texto forma parte de *Las resistencias fundamentales* un especial periodístico sobre las resistencias a los fundamentalismos en Latinoamérica y el Caribe coordinado por LatFem-Periodismo Feminista



Mariana Lacerda tiene 30 años y fue la primera egresada universitaria de su familia: “Como mujer negra, pobre y periférica, siento dificultad de estar en determinados espacios, siento que no están preparados para recibirme”, dice. Su militancia en la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) de Ceará, en el nordeste brasileño, fue el motor que impulsó su participación en el ámbito académico, contra todo pronóstico. La MMM es un movimiento global que existe desde comienzos de los 2000 y en Brasil se robusteció con los sucesivos Foros Sociales Mundiales. “Conociendo la Marcha, los movimientos sociales, la organización partidaria, percibí que tenía derecho a la universidad, y eso cambió mi trayectoria”, explica. Ahora es graduada en Ciencias Sociales e investiga en su maestría la participación de las mujeres negras en la política.

La Ley de Cuotas Sociales, que establece la reserva de un mínimo del 50% de las plazas en las universidades federales para estudiantes de escuelas públicas y para personas negras e indígenas, fue sancionada en 2012 y tuvo impactos positivos en la participación de las mujeres negras como Mariana Lacerda, que hoy son **mayoría** en las universidades. No obstante, el derecho a la universidad es uno de los tantos que se vienen recortando en el país sudamericano desde el golpe que sacó a Dilma Rousseff de la presidencia en 2016. A partir de entonces se congelaron recursos públicos para la educación, se redujeron las becas de estudio y la falta de inversión pública resultó en la quema del Museo Nacional, una referencia de investigación brasileña. No es ninguna novedad que el proyecto de desmonte neoliberal del Estado reduce las posibilidades de la participación popular en la producción de conocimiento e incrementa las exclusiones sociales.

“A veces, cuando hablo sobre las dificultades estructurales, las personas se sorprenden. Hay un mundo de desigualdades”, dice Mariana. Organizarse con otras fue la forma que ella encontró para hacerle frente a ese mundo de desigualdades desde muy chica. Empezó su militancia cuando era joven, participando en la asociación de su barrio y también en organizaciones populares cristianas. Cuando conoció el movimiento feminista, vio en la colectividad de las mujeres la posibilidad de actuar para reorganizar el mundo y la vida: la propia y la de las mujeres que la rodeaban. En las actividades de formación, movilizaciones y acciones en las calles, encuentros y plenarias, ella y tantas otras compañeras ponen en marcha el planteamiento de otro mundo y, al mismo tiempo, cambian la sociedad en su tiempo presente, teniendo la solidaridad como principio fundamental.

“La Marcha Mundial de las Mujeres me enseñó que somos sujetos activos de la historia. Cuando me reconocí en eso, comprendí que luchamos contra una serie de opresiones, pero que somos más que esas opresiones. Cambia todo saber que mi lugar como mujer negra y periférica es de una mujer pensante”, sintetiza Mariana. Y sigue: “con el movimiento negro, aprendí que hay una estructura, que esa estructura me afecta, y que puedo crear colectivamente, con otras compañeras y en la lucha, estrategias para huir de eso”.



Movilización del 8 de marzo de 2019



En los últimos años en Brasil, las mujeres fueron fundamentales en politizar la crítica y el rechazo al conservadurismo con una campaña en las calles y las redes contra el presidente Jair Bolsonaro. Los movimientos feministas habían advertido que la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018 sería una radicalización de las políticas excluyentes. Por eso, las movilizaciones feministas por #EleNão (“Él No”) tomaron grandes proporciones, y articularon movimientos de varios sectores en contra de una propuesta y una campaña política basada en desinformación, misoginia, racismo, LGTBfobia y neoliberalismo. Las movilizaciones se sumaron a un esfuerzo popular por debatir la política y lo que estaba en juego, en una acción descentralizada de “*vira voto*” (“cambia el voto”) que se desarrollaba en pequeños grupos en las plazas, metros y puntos estratégicos dentro de los barrios.

Todas las advertencias de los movimientos sociales y políticos se hicieron realidad. El ministro de economía, Paulo Guedes, es responsable por una agenda de privatizaciones y por reformas como la de las pensiones, que aumentó el tiempo de trabajo necesario para la jubilación de las mujeres. La pastora evangélica Damares Alves, ministra de las mujeres, la familia y los derechos humanos, se empeña para fortalecer la presencia de la iglesia en el Estado, defiende las múltiples propuestas de criminalizar a las mujeres que abortan y dificultar aún más el procedimiento en el país, incluso en las causales ya permitidas en la ley.

Todos los escenarios se volvieron más hostiles en los diversos planos con la llegada de la pandemia y el **negacionismo oficial**. Bolsonaro se burló de las muertes por coronavirus y las medidas de aislamiento bajo el discurso de que “la economía no puede parar”. Mientras el gobierno nacional negaba la crisis, la Marcha Mundial de las Mujeres — como otras organizaciones populares— tuvo que articular su acción política en un esfuerzo permanente de solidaridad: cuidando a las compañeras que no tenían para pagar las cuentas a fin de mes, a aquellas que pasaron por el duelo y por sufrimientos psíquicos y emocionales, articulando donaciones, distribuyendo canastas básicas, productos de aseo personal artesanales y alimentos agroecológicos —una propuesta que fortalece a las mujeres cis y trans de la ciudad, que reciben, y las del campo, que producen—.

Casi a diario, las compañeras van poniendo juntas en una caja el jabón artesanal que una produjo, las frutas y legumbres cultivadas por un grupo de agricultoras, un par de mascarillas hechas por un grupo de cosedoras, el arroz y los porotos donados por otra organización amiga, un volante político. Después del montaje de decenas de cajas, articulan para que lleguen a las compañeras que las necesitan. No hay futuro sin presente. La actividad es permanente, y solo es posible con la participación de varias manos al mismo tiempo. Las acciones han sido enmarcadas por la unidad entre varios movimientos y organizaciones comunitarias, y probaron que la solidaridad es política.



Activistas en defensa de la democracia.



“Si hiere nuestra existencia, vamos a ser resistencia”

“Si hiere nuestra existencia, vamos a ser resistencia” es uno de los lemas de las mujeres y de los pueblos en resistencia en Brasil desde el ascenso del autoritarismo y del fundamentalismo al poder. La vida se ha hecho mucho más difícil: por una parte no hay empleo, por otra el empleo que hay no tiene derechos garantizados. El hambre crece y los horizontes de futuro se reducen en ese país que llegó al triste segundo lugar mundial en muertes por coronavirus. “Nadie debería tener que elegir entre morir de hambre o de Covid-19” es [la invocación de la enfermera y militante feminista negra Talitha Demenjour](#), que vive en Río de Janeiro y forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres.

Resistir es una acción colectiva necesaria para sostener la vida. Esta tarea es protagonizada por las mujeres, especialmente las mujeres negras, en las casas, los espacios de trabajo, las comunidades, los barrios, los campos, las periferias. En la mitad de 2020, una artesana trabajadora de la economía solidaria dio el [siguiente testimonio](#): “Hoy estoy viviendo un día tras otro, me despierto y pienso ‘tengo esta cantidad de dinero’, de ahí calculo ‘¿qué voy a hacer de comer?’ ‘¿qué factura debo pagar? Voy derrapando, un día tras otro. Me siento una hoja suelta, no tengo empleo, no tengo casa... no tengo donde caer muerta”. Para ella y muchas otras trabajadoras informales, que dependen de ferias y de trasladarse en la ciudad, estar organizada junto a las compañeras de la economía feminista y solidaria fue la manera de lograr buscar derechos, como el auxilio de emergencia, y de construir alternativas de renta y comercialización, como las ferias virtuales.

Enfrentarse al fundamentalismo y al racismo

Mientras el pueblo brasileño padecía por las múltiples crisis (sanitaria, política, económica, ambiental) —lo que se llamó [“coronacapitalismo”](#)—, la extrema derecha aprovechaba para “ir pasando la boyada”, una metáfora no tan metafórica: la frase del ex-ministro de medio ambiente Ricardo Salles sintetiza la estrategia del gobierno de deshacer regulaciones y normas para aprobar silenciosamente reformas y cambios de infraestructura que afectan el trabajo, la agricultura y la naturaleza. Y abren camino para los grandes empresarios del campo y de la ciudad. Para las mujeres *quilombolas*, indígenas, agricultoras y pescadoras, que cuidan la tierra y la naturaleza, los efectos de “pasar la boyada” son el racismo ambiental, la violencia y la desposesión.

Mientras tanto, en las ciudades, la violencia racista también está accionada por el Estado como una herramienta de control, que es herencia del colonialismo. Vivir y transitar en ciudades militarizadas nos cuesta muchas vidas, principalmente de la juventud negra, pobre y periférica. “¿Quiénes protegen a las mujeres negras?”, [pregunta la líder estudiantil Pâmela Layla](#), directora de la secretaría de mujeres de la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES), quién también participa de la MMM en Ceará. Para ella, “la sensación es la de que en ningún lugar ocupado por nosotras estaremos seguras. Las mujeres negras se están muriendo de hambre, de COVID-19 y de balazos de la policía”.

La militarización va de la mano de la violencia y la criminalización de la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sexualidades. “La lesbofobia apagó concretamente existencias. Y, simbólicamente, los casos son incontables. Es posible que una de nuestras reivindicaciones más básicas sea el derecho de existir, sin más escondites, sublimaciones y violencias”, dice la comunicadora feminista [Fabiana Benedito](#), que vive en Salvador. Con el ascenso político de los sectores de la extrema-derecha, conservadores y fundamentalistas en la institucionalidad y en la cotidianidad, la posibilidad de decidir y vivir la vida que se quiere está todavía más obstruida para las mujeres. Es como dice [la militante de la MMM de Pernambuco Nathalia Diórgenes](#): “en países donde el aborto está del todo prohibido, las mujeres son puestas cotidianamente bajo sospecha. La vida reproductiva de la mujer está contaminada por la criminalización”.

En Río de Janeiro, donde las iglesias evangélicas, las milicias y las policías tejen una compleja red de disputas de poder, la violencia estatal camina junto al fortalecimiento del patriarcado y del racismo. Para [Dara Sant’Anna](#), que vive allí y participa de la MMM y del Movimiento Negro Unificado (MNU), “no conseguimos tener respuestas porque tenemos una policía que viene desde la dictadura militar y de los procesos de quema de archivos y ocultación de documentos”. Pero al mismo tiempo que hay



dolor, hay lucha: “las denuncias de racismo vienen siendo hechas y las personas buscan informarse, cuestionarse sobre el motivo por el cual decimos que hay racismo en Brasil. Las mujeres han construido puentes muy fuertes, como los colectivos de madres víctimas de la violencia policial”.

Es una situación que se da en todas partes del largo territorio brasileño. Durante una actividad virtual por el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, [Mariana Lacerda](#) dijo: “tenemos el reto de contar nuestras historias. Las experiencias de sociabilidad de los *quilombos*, por ejemplo, nos enseñan muchas cosas sobre solidaridad, supervivencia y otras formas de relación. Es en la realidad concreta, que percibimos la interseccionalidad y la imbricación entre género, raza y clase. Nos movemos y enfrentamos las estructuras”.



! # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

LATFEM

?



Red de
Periodistas
Feministas
de Latinoamérica
y el Caribe

!!